



ESTA PUBLICACION CONTIENE
ADEMAS LA REUNION 2°

REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1ª REUNION — 1ª SESION ORDINARIA (Especial) —
30/31 DE MAYO DE 1989

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor VICTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO JUSTO PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO LAUREANO ALMIRÓN

SENADORES PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AMOEDO, Julio A.
BENÍTEZ, Alfredo L.
BERHONGARAY, Antonio T.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO, Leopoldo
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CORCHUELO BLASCO, Hebe
DE LA RÚA, Fernando
FALSONE, José A.
GASS, Adolfo
GENOUD, José
GIL, Francisco
GROSSO, Edgardo Roger M.
GURDULICH de CORREA, Lilliana I.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
JUAREZ, Carlos A.
LAFFERRIERE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo

MURGUIA, Edgardo P. V.
NÁPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
POSLEMAN, Eduardo
RIVAS, Orljela del Valle
RODRIGUEZ SAA, Alberto J.
ROMERO, Juan Carlos
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SAADI de DENTONE, Alicia A.
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAPAG, Elías
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
TENEV, Carlos
TRILLA, Juan
VELAZQUEZ, Héctor J.
VIDAL, Manuel D.

AUSENTES, CON AVISO:

CONCHEZ, Pedro A.
JORGE, Annuar
MOLINA, Pedro E.
SALIM, Luis

SUMARIO

1. Por invitación del señor presidente del Honorable Senado, el señor senador por Corrientes doctor Juan Ramón Aguirre Lanari procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 96.)
2. Lectura de la solicitud de sesión especial presentada por varios señores senadores y del respectivo decreto dictado por la Presidencia. (Pág. 96.)
3. Mociones de cuarto intermedio formuladas por distintos señores senadores. Se aprueban. (Pág. 96.)
4. A moción del señor senador Nápoli se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el proyecto de ley por el que se declara el estado de emergencia social, sanitaria y alimentaria en todo el territorio de la República y se ratifica el decreto del Poder Ejecutivo nacional por el cual se implantó la vigencia del estado de sitio en el mismo ámbito. (Pág. 97.)
5. Apéndice:
Sanción del Honorable Senado. (Pág. 100.)

—En Buenos Aires, a las 18 y 59 del martes 30 de mayo de 1989.

Sr. Presidente. — Con quórum reglamentario queda abierta la sesión especial convocada a los efectos de ratificar la vigencia del estado de sitio en todo el territorio de la República decretado por el Poder Ejecutivo nacional.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al señor senador por Corrientes doctor Juan Ramón Aguirre Lanari a izar la bandera nacional.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Juan Ramón Aguirre Lanari procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

CITACION A SESION ESPECIAL

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura a la solicitud de sesión especial presentada por varios señores senadores y al respectivo decreto dictado por esta Presidencia.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee)

Buenos Aires, 29 de mayo de 1989.

*Señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
doctor Víctor H. Martínez.*

S/D.

Los senadores que suscriben, tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente, a efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer, en un todo de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento del Honorable Senado, se cite a sesión pública especial para el día 30 del corriente mes, a la hora 18, a fin de dar entrada y proceder al tratamiento del mensaje y proyecto de ley ratificando la vigencia del estado de sitio en todo el territorio de la República.

Saludo a usted muy atentamente.

Antonio O. Nápoli. — Adolfo Cass. — Luis A. J. Brascesco. — Jorge O. Solana.

Buenos Aires, 29 de mayo de 1989.

Visto: la solicitud formulada por varios señores senadores, para que se convoque a sesión especial, a fin de considerar el proyecto de ley ratificando vigencia del estado de sitio en todo el territorio de la República, y

CONSIDERANDO:

Que dicho pedido se encuadra en el artículo 19 del Reglamento del Honorable Senado y en los artículos 6º, inciso 2º, y 23 de la Constitución Nacional,

Por ello:

El presidente del Honorable Senado de la Nación

DECRETA:

Artículo 1º — Por Secretaría cítese a los señores senadores a sesión especial, para el día 30 del corriente, a las 18 horas, a fin de dar entrada y proceder al tratamiento del mensaje y proyecto de ley ratificando la vigencia del estado de sitio en todo el territorio de la República.

Art. 2º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Senado.

Art. 3º — Comuníquese.

3

CUARTO INTERMEDIO

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: la presente sesión ha sido convocada para tratar el mensaje y proyecto de ley sobre ratificación del decreto referido al estado de sitio, que ha tenido entrada por la Cámara de Diputados y, según la información de que disponemos, estarían por ser considerados de un momento a otro por esa Cámara.

Por ello, de acuerdo con lo conversado por algunos señores senadores integrantes de distin-

tos bloques, propongo que se pase a cuarto intermedio a la espera de que la Cámara de Diputados remita sancionado el texto del proyecto en cuestión.

Al respecto, me parece oportuno fijar ese cuarto intermedio hasta las 20 y 30, hora en que podría reanudarse esta sesión.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por la Capital.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Invito a los señores senadores a pasar a cuarto intermedio hasta las 20 y 30.

—Son las 19 y 3.

—A la 0 y 7 del miércoles 31 de mayo de 1989.

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Señor presidente: solicito que se pase a cuarto intermedio por dos horas más con el objeto de tratar uno de los proyectos que tendrá entrada en el Senado de la Nación y que en este momento está siendo estudiado en la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Continúa el cuarto intermedio por dos horas más.

—Es la 0 y 10.

—A las 4 y 22.

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

4

ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL,
SANITARIA Y ALIMENTARIA Y
ESTADO DE SITIO

Sr. Nápoli. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Señor presidente: solicito que se dé lectura al proyecto que ha tenido entrada recién. Luego haré nuevamente uso de la palabra.

Sr. Presidente. — Efectivamente, ha tenido entrada un proyecto suscripto por varios señores senadores, cuya lectura se va a dar por Secretaría.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase el estado de emergencia social, sanitaria y alimentaria en todo el territorio de la República a partir de la promulgación de la presente y por el término de sesenta días.

Art. 2º — Sin perjuicio de otras medidas a disponer por el Poder Ejecutivo y leyes complementarias, se establece:

- a) Elevar las jubilaciones mínimas del Sistema Nacional de Previsión a la suma de **A** 7.200 a partir del 1º de junio de 1989. Desde la misma fecha se establecerá una pensión mínima dentro del Sistema Nacional de **A** 4.500;
- b) El 50 % del sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre se pagará íntegramente el día 14 de junio de 1989, tanto para los salarios cuanto para las jubilaciones y pensiones;
- c) Se invita a los gobiernos provinciales, territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida o islas del Atlántico Sur y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a dictar normas similares en sus respectivas jurisdicciones.

Art. 3º — Sustitúyense los textos de los artículos 10 y 14 de la ley 16.459 por los siguientes:

Artículo 10: A petición de cualquiera de los sectores representados en el Consejo, se podrá modificar el monto del salario vital mínimo antes de su vencimiento, pero la resolución modificatoria sólo entrará en vigencia en la forma y condiciones establecidas en el artículo 14 de esta ley.

Excepcionalmente, y con el acuerdo de los tres sectores representados, el Consejo podrá disponer que la modificación entre en vigencia y surta efectos a partir del día siguiente al de su publicación.

Artículo 14: El salario vital mínimo tendrá vigencia y será de aplicación obligatoria al mes siguiente de la publicación, salvo el caso del segundo párrafo del artículo 10. En todos los casos, dentro de los tres días de haberse tomado la decisión deberá publicarse por un día en el Boletín Oficial o en otros órganos periodísticos que garanticen una satisfactoria divulgación y certeza sobre la autenticidad de su texto.

Art. 4º — Cuando el porcentaje del incremento salarial dispuesto por el gobierno nacional supere el porcentaje de aumento de los recursos de coparticipación de la ley 23.548 en igual período de tiempo, el Tesoro nacional transferirá a las provincias las sumas que resulten de aplicar esa diferencia porcentual sobre el costo salarial de cada provincia. A los fines de la determinación del costo salarial se computará la planta personal ocupada al 31 de diciembre de 1988 si hubiera registro fehaciente.

Esta regla de transferencia excepcional de recursos operará sólo en el caso en el cual la remuneración

de los agentes provinciales no supere a la de los servidores públicos nacionales.

Las provincias dictarán normas similares para su relación con los municipios.

Art. 5º — Ratifícase el decreto de necesidad de urgencia 714 del Poder Ejecutivo nacional del día 29 de mayo de 1989 por el cual se implantó la vigencia del estado de sitio en todo el territorio de la República por el término de 30 días a fin de hacer cesar la perturbación interior imperante.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Antonio O. Nápoli. — Luis Rubeo. —
Oraldo N. Britos. — José A. Romero Feris. — Eduardo Menem. — Héctor J. Velázquez. — Alberto J. Rodríguez Sad. —
Juan R. Aguirre Lanari. — Manuel D. Vidal. — Antonio T. Berhongaray.*

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El Poder Ejecutivo nacional ha remitido un proyecto de ley solicitando la ratificación de la vigencia del estado de sitio implantado en todo el país, por el decreto de necesidad y urgencia 714 del día 29 de mayo de 1989.

En el mismo se invoca la existencia de un estado de conmoción interior que impone el ejercicio del remedio previsto por el artículo 23 de la Constitución Nacional.

Sin perjuicio de convenir que las características del conflicto social existente imponen la utilización de dicho remedio institucional que se prevé en nuestra Carta Magna, lo que lo compatibiliza con el estado de derecho, consideramos que el mismo constituye una condición necesaria pero no suficiente de la respuesta que debe darse a la grave emergencia que vivimos.

Es indudable que las medidas previstas para situaciones normales resultan insuficientes, cuando acontecimientos extraordinarios hacen exigible el máximo funcionamiento institucional en salvaguardia de los derechos y garantías constitucionales y el pleno prestigio de los poderes establecidos precisamente para la adecuada tutela de los mismos.

Pero si bien tales derechos y garantías pueden ser eficazmente resguardados mediante el funcionamiento de las facultades previstas por el artículo 23 de la Constitución Nacional, resulta imperioso integrar tales medidas con otras que se dirijan a algunas de las causas de los desbordes y actúen no sólo sobre los síntomas.

En ese sentido, consideramos que es menester un verdadero estatuto de emergencia que ponga en movimiento no sólo la faz represora del ordenamiento jurídico —que asimismo deberá abarcar las infracciones de orden económico que plantea la hora— sino también los medios de que dispone el Estado en otras áreas para eliminar o por lo menos atenuar el impacto en los sectores más carenciados de nuestra comunidad.

Esta situación impone la adopción de remedios inmediatos que atiendan a la emergencia social con iguales caracteres de urgencia que se invocan para las medidas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

Las prestaciones previsionales deben ser incrementadas modificando en caso necesario las normas previstas para situaciones normales que ahora resultan desbordadas por la realidad.

Asimismo se establece el anticipo del cobro del aguiñado al día 14 de junio, cuyos montos serán abonados sin descuento alguno por los pagos ya anticipados.

Con el mismo objetivo se propone la modificación de la ley 16.459 a fin de agilizar el funcionamiento del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con sentido de excepcionalidad el gobierno nacional se compromete a prestar ayuda financiera a las provincias para colaborar en las mayores erogaciones que por aumentos salariales y previsionales ellas deban abonar.

Resulta conveniente así también que al prestarse el acuerdo para la implantación del estado de sitio el Congreso haga expresa su voluntad en el sentido de que, el ejercicio de los poderes pertinentes, sea realizado abarcando a más de las situaciones clásicas de arresto o traslado, las que deriven de la incompatibilidad del accionar de los agentes económicos con los deberes de la hora, mediante conductas que, como el acaparamiento de bienes, la elevación injustificada de precios o la violación de normas sobre comercialización o exportación redunden en detrimento de los intereses de la comunidad.

Esta grave conmoción interior y su extensión a diversas provincias lleva a este Honorable Congreso a ratificar la medida adoptada por el Poder Ejecutivo nacional implantando el estado de sitio en todo el territorio del país.

*Antonio O. Nápoli. — Luis Rubeo. — Orlando N. Britos. — José A. Romero Feris. —
Eduardo Menem. — Héctor J. Velázquez. —
Alberto J. Rodríguez Sad. — Juan R. Aguirre Lanari. — Manuel D. Vidal. —
Antonio T. Berhongaray.*

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Señor presidente: nuestro bloque solicita el tratamiento sobre tablas de este proyecto.

Sr. Presidente. — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por Río Negro.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: nuestro bloque apoya la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador Nápoli.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en general. Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente: quiero expresar mi apoyo a la aprobación de este proyecto de ley en general, pero también deseo manifestar mi desacuerdo con el artículo 5º, que extiende el estado de sitio a todo el territorio de la República.

Entiendo, señor presidente, que el estado de sitio debe limitarse a las provincias en las que existen las causas que la Constitución prevé para su imposición. Se trata de una medida de excepción que acarrea graves consecuencias, como la suspensión de los derechos y garantías de la Constitución y, por consiguiente, la norma del artículo 23 de nuestra Carta Magna debe interpretarse con carácter restrictivo.

El artículo 23 de la Constitución Nacional permite imponer el estado de sitio cuando existe un estado de conmoción interior, pero no cualquier estado de conmoción interior. En otras palabras, debe reunir dos características: que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución y al mismo tiempo que ponga en peligro a las autoridades emanadas de la propia Constitución.

El Poder Ejecutivo ha impuesto el estado de excepción por la situación existente en la provincia de Santa Fe. Así se dice claramente en los fundamentos del decreto 714 dictado en el día de ayer. También podría imponerse en las otras provincias en donde se dieran los recaudos que exige el artículo 23 de la Constitución Nacional, pero en modo alguno se justifica extender la aplicación del estado de sitio a los distritos en donde la situación es normal y no existe, por consiguiente, ningún caso de conmoción. Si así procedemos, estaremos contrariando la letra y el espíritu de la Constitución Nacional. La mera posibilidad de que pueda llegar a producirse un estado de conmoción no justifica imponer el estado de sitio; es preciso que exista previamente la conmoción.

Finalmente, a título de ejemplo y para comprender mejor la situación que estoy planteando, señalo que en las provincias de la Patagonia y en Tierra del Fuego la situación es normal y nada justifica que ahí se suspendan las garantías y los derechos constitucionales. En otros distritos la situación es también de normalidad y no hay nada que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución Nacional y de las autoridades creadas por ella.

Con estas palabras, señor presidente, dejo señalado mi desacuerdo con el carácter y la extensión que da el artículo 59 del proyecto que acaba de leerse, al implantar en todo el territorio de la República el estado de sitio en lugar de limitarlo a aquellas provincias en donde se dan los recaudos que la Constitución exige.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.

Sra. Gardulich de Correa. — Solicito que por Secretaría se dé lectura al decreto 714.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee)

Buenos Aires, 29 de mayo de 1930.

Visto lo informado por el señor ministro del Interior acerca de la situación de grave conflicto social existente en la provincia de Santa Fe, que determina la existencia de un estado de conmoción interior e imposibilita el normal desenvolvimiento de las instituciones locales, y hace necesario preservar y asegurar, con carácter de urgencia, la libertad y tranquilidad de los habitantes de la mencionada provincia en el ejercicio de sus derechos y garantías (artículos 14 y 33 de la Constitución Nacional), y

CONSIDERANDO:

Que esa conmoción ha de ser conjurada mediante el remedio previsto por el artículo 23 de la Constitución Nacional, el cual ha de extenderse a todo el territorio del país, toda vez que así lo hace necesario la posibilidad de que los instigadores de esos hechos actúen en distintos ámbitos geográficos,

Que la Constitución Nacional ha previsto un supuesto de emergencia en el cual el Poder Ejecutivo se halla facultado para declarar el estado de sitio en caso de conmoción interior, cuando el Congreso Nacional esté en receso (artículos 87, inciso 26, y 80, inciso 19).

Que ello no obsta a que en casos excepcionales en los cuales toda dilación, aunque sea de unas pocas horas, puede agravar el peligro inminente para las instituciones, sea posible afirmar la existencia de una situación análoga a la que permite el ejercicio de la atribución mencionada en el considerando precedente. Median, en efecto, razones idénticas a las tenidas en cuenta por la Constitución Nacional en esa hipótesis.

Que la especial situación a la que se hace referencia, toda vez que importa el ejercicio de una atribución propia del Honorable Congreso de la Nación impone la necesidad de disponer la medida ad referendum de ese cuerpo, y someterla de inmediato a su ratificación.

Que nuestros más distinguidos juristas han admitido la doctrina de los reglamentos de necesidad y urgencia (conforme considerandos del decreto 807 del 19 de abril de 1975).

Que esto criterio ha sido convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su actual composición.

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase el estado de sitio en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días a partir de la fecha.

Art. 2º — Dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Decreto 714

RAÚL R. ALFONSO.

José G. Dambón. — Juan C. Pugliese. — Ideler S. Tonelli. — José H. Jaurena. — Susana M. Ruiz Cerrutti. — Jesús Rodríguez. — Roberto P. Echarte.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora por Santa Fe.

Sra. Gurdulich de Correa. — Es para aclarar que el artículo 5º lo único que hace es ratificar el estado de sitio en todo el territorio de la República en los mismos términos en que lo ha establecido el Poder Ejecutivo nacional en su decreto 714. Es decir, la citada norma no extiende la zona del estado de sitio sino que únicamente ratifica los mismos términos con los que fue definido por el Poder Ejecutivo en su decreto.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en particular.

—Se lee el artículo 1º.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: quiero aclarar, a los efectos de que quede constancia, que en este proyecto de ley de emergencia social y económica estamos tratando exclusivamente el aspecto de las erogaciones presupuestarias que vamos a tener como consecuencia de aumentar las jubilaciones mínimas del Sistema Nacional de Previsión, del pago completo del cincuenta por ciento del sueldo anual complementario a abonar íntegramente el próximo 14 de junio y de solventar a las provincias el mayor porcentaje que tengan de gastos como consecuencia de respetar las pautas salariales en el orden nacional en el supuesto de que no alcancen los recursos obtenidos de la ley de coparticipación federal.

Desde luego que tomado así, de esta forma, parecería que nosotros estuviéramos votando exclusivamente gastos y no respetáramos una limpieza presupuestaria en el sentido de incorporar también los ingresos necesarios que permitan alimentar al Tesoro para el pago de estos gastos.

Pero debemos dejar constancia de que simultáneamente con el tratamiento de este tema aquí en el Senado, en la Cámara de Diputados se está tratando —como es lógico que así sea— el paquete impositivo que nos permitirá solventar estas erogaciones que estamos considerando, razón por la cual la responsabilidad de este cuerpo queda resguardada.

Esto es lo que quería dejar aclarado a los efectos de concluir con el problema de los ingresos y egresos.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 1º tal como figura en el proyecto.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 2º y 3º.

—Se lee el artículo 4º.

Sr. Romero. — Pido la palabra.

Sr. Romero Feris. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente: quiero hacer una aclaración con respecto al segundo párrafo de este artículo, referido a la llamada garantía salarial, a los efectos de que haya una interpretación clara.

Dicho párrafo establece que esta regla de transferencia excepcional de recursos operará sólo en el caso en que la remuneración de los agentes provinciales no supere a la de los servidores públicos nacionales. La interpretación correcta sería que esta garantía no operará sólo con respecto a los agentes cuyos sueldos sean mayores sin invalidar la compensación para la totalidad de los mismos. Por ejemplo, si una provincia es merecedora de esta compensación pero resulta que los agentes del Poder Judicial tienen una remuneración mayor que los de la Nación, se deberá hacer la deducción del monto de los sueldos de dicho organismo y la provincia recibir la compensación por el monto de los sueldos de los demás agentes. Digo esto ya que a simple vista podría interpretarse que existiendo agentes provinciales que ganan más que los nacionales, se invalidaría la totalidad de la compensación. Debe quedar en claro que esto no es así y que solamente se debe hacer la deducción del monto de los sueldos de aquellos agentes provinciales cuya remuneración sea mayor que la de los de la Nación y la provincia recibir la compensación por los demás agentes.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente: quiero referirme en especial al último párrafo del artículo 4º, fundamentalmente con relación a su redacción.

Allí se dice que las provincias dictarán normas similares para su relación con los municipios. Sin embargo, de acuerdo con nuestra Constitución y con el régimen federal que tenemos, no podemos obligar a las provincias a que dicten normas. En última instancia podemos recomendar pero no obligar.

Por esta razón, creo que tendríamos que modificar la redacción de este párrafo y decir: "Recomendar a las provincias que dicten normas similares para su relación con los municipios".

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — A los efectos de que quede bien en claro cuál fue el sentido de la redacción del artículo 4º en el párrafo que recién señaló el señor senador por Salta en cuanto a que la remuneración de los agentes provinciales no supere a la de los servidores públicos nacionales, por supuesto se trata del caso en que haya igualdad de condiciones, de categorías y de circunstancias.

Sr. Rodríguez Saá. — Aceptamos la modificación propuesta por el señor senador por Corrientes.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Romero Feris. — Insisto en la modificación propuesta.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Con respecto a lo manifestado por el señor senador por Corrientes quiero aclarar que cuando en el último párrafo del artículo 4º se dice que las provincias dictarán normas similares para su relación con los municipios, se lo hace con el sentido de que el Estado provincial debe darle al municipio igual tratamiento que el que por esta ley se impondrá para el Estado nacional con respecto a las provincias.

Por ello la redacción debe ser imperativa, para que todo el sistema encaje con el mecanismo que se quiere implementar. A estos efectos, cada provincia determinará si dictará normas o establecerá mecanismos de cumplimiento, pero es evidente que no se puede dejar al municipio sin la asistencia de fondos que, por otra parte, provienen del gobierno nacional.

Este es el sentido que tiene la norma y por eso hay que mantenerla dentro de este espíritu.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Los fondos que provienen del gobierno nacional son los que realmente corresponden a las provincias, y los salarios, remuneraciones o incrementos salariales son fijados por el poder central. De manera que para que las provincias puedan sujetarse a ello se requiere que perciban los fondos necesarios.

De ninguna manera, de acuerdo con nuestro sistema constitucional, nosotros podemos imponer y obligar a las provincias a que lo hagan con los municipios. También los municipios son autónomos y, por supuesto, deben ser respetados por los gobiernos provinciales. Asimismo, tienen su coparticipación respectiva y los fondos correspondientes.

Es por estas razones que pienso que es necesaria la modificación de la redacción agregando la palabra "recomendar", a efectos de salvar esta situación que creo importante para respetar al federalismo y a la Constitución Nacional.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: es cierto lo que manifiesta el señor senador por la Capital en el sentido de que el espíritu de la norma es que las provincias adopten también similares medidas con respecto a los municipios. Pero también es cierto lo expresado por el señor senador por Corrientes en cuanto a que no resulta correcto que mediante una ley se imponga a las provincias una obligación de esta naturaleza.

Por tal razón, nuestro bloque, en defensa de la autonomía de las provincias, apoyará la modificación propuesta por el señor senador por Corrientes.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: voy a ratificar la posición enunciada por el señor senador Romero Feris, recordando la disposición constitucional pertinente, que es el artículo 5º de nuestra Carta Magna, que implica la clásica garantía federal otorgada por el Estado nacional a las provincias.

No podemos hacerle decir a dicho artículo otra cosa más que la que dice, porque está insito en la más rancia estirpe federalista de nuestra Constitución. No hagamos interpretaciones que por vía de una extensión puedan debilitar esa garantía propia de las provincias argentinas, irrumpiendo —como, lamentablemente, ha sucedido en muchos casos— en nuestra historia constitucional, debilitando y degradando la pura esencia del régimen que quisieron dictar nuestros constituyentes, particularmente, cuando la afianzaron en la reforma de 1860.

Va de suyo que —como bien lo ha señalado el señor senador Romero Feris— si nosotros, como Poder Legislativo nacional, venimos a reforzar las acciones provinciales lo hacemos porque estamos viviendo una circunstancia política que no podemos eludir, sobre todo, aquellos que somos representantes de las provincias.

Cuando el poder central eleva el sueldo de sus servidores lo hace porque, sin duda alguna, tiene recursos con que habitualmente las provincias no cuentan y, por ende, es lógico que eso produzca un efecto y una incidencia inevitable en ellas. Para afrontar esa situación —que ya se está planteando o se planteará en las provincias— hemos postulado esta norma que el Se-

nado sancionará esta noche. Pero de allí a obligar a las provincias a que hagan lo mismo con los municipios —lo que seguramente harán por las mismas razones políticas por las cuales nosotros las estamos ayudando—, hay un trecho. Creo que esto debe ser contemplado no a título de obligación sino de recomendación, ya que se sobreentiende que las provincias y los titulares de los respectivos poderes políticos provinciales tendrán la sensibilidad política suficiente para obrar de la misma manera en que lo estamos haciendo nosotros como miembros del Poder Legislativo nacional con respecto a los poderes provinciales.

De manera que creo que la recomendación o sugerencia de que esto no se torne una obligación imperativa —que de no cumplirse pudiera significar, incluso, que las provincias no estuvieran actuando dentro de la garantía federal establecida por el artículo 5º de la Constitución— es acertada.

Aprobemos, pues, que esto sea simplemente una recomendación y tengamos la certeza de que la sensibilidad política de los poderes provinciales habrá de obrar en consecuencia.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: quiero hacer la aclaración de que este artículo 4º es excepcional.

Si bien ésta es una metodología que se ha empezado a aplicar en el país por razones de recaudación, por problemas de disminución de los rendimientos de las economías regionales, la Constitución Nacional es clara y concreta a este respecto: las provincias, en ejercicio de su poder autónomo, fijan sus presupuestos de gastos y recursos y determinan las escalas salariales de sus agentes de la administración pública.

Esto es tan así que más de una vez en las provincias se han tenido que dictar leyes del tipo de las denominadas de "enganche" en virtud de las cuales ellas, en ejercicio de su propia autonomía, determinaban que fijarían un salario similar al de la Nación.

A este respecto el artículo 4º expresa que esta regla de transferencia excepcional de recursos operará sólo en el caso en que la remuneración de los agentes provinciales no supere a la de los servidores públicos nacionales. Es decir que la Nación, por todas las razones que se han dado, ha dispuesto enviar a las provincias determinadas sumas de dinero para equiparar los mínimos que fije la Nación a sus agentes. Pero eso, por una razón de equidad, de justicia, por un motivo que determina claramente la uniformidad de sentido

que tiene esta ley, no quita que la Nación ponga una condición, que desde ningún punto de vista vulnera las autonomías provinciales, sus leyes ni las ordenanzas municipales.

Esto que en un acto de justicia hace la Nación, respecto de lo cual todos estamos de acuerdo, por lo que no vale la pena seguir hablando de ello, lo hace en ejercicio de sus facultades sin determinar obligación clara y concreta o como una imposición legal, sino por un sentido constitucional de Nación, de Estado.

Entonces, es lógico que, atento a esa solidaridad del conjunto hacia las autonomías que conforman nuestra nacionalidad y nuestro Estado, el Congreso de la Nación establezca ciertas y determinadas condiciones para que esto sea justo, equitativo, y que quede distribuido en forma real y concreta en todos los municipios con el sentido que se da a esta norma.

Por lo tanto, sin perjuicio de que se adopte una posición u otra, no creo que desde ningún punto de vista se estén vulnerando las autonomías provinciales porque se trata de un acto por el cual el gobierno nacional, en ejercicio de sus facultades y comprendiendo la emergencia que se vive en el país, dispone el envío de dinero.

Entonces, es justo, legal y constitucional que se establezca una condición. Eso no vulnera la Constitución.

Quería hacer esta aclaración, que puede ser opinable pero que, en definitiva, implica que este artículo no vulnera la Constitución. Podrá discutirse si es recomendable o no, pero eso es otra cosa.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: interpreto las razones expuestas por el señor senador por Entre Ríos, pero sigo entendiendo que entramos en un terreno que puede resultar peligroso.

Obsérvese que el artículo 4º, en su párrafo primero habla de la diferencia porcentual sobre el costo salarial de cada provincia.

Y el artículo 4º se refiere a la remuneración de los agentes provinciales, expresando que ella no supere a la de los servidores públicos nacionales.

Es decir, que la regla de comparación se aplica entre empleados nacionales y provinciales; no entre empleados nacionales y municipales. Ello, salvo que se entienda —cuando se habla de la "planta personal"— que vamos a referirnos también al municipal. En ese caso, el "quantum" mayor que tendrá que girar la

Nación será también comprendiendo y abarcando a los empleados municipales.

Si así se entendiera, no tengo inconveniente en que esto quede como regla de interpretación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: he solicitado la palabra para apoyar la moción propuesta por el señor senador Romero Feris.

Creo que a los señores senadores por la Capital y por Entre Ríos no les asiste la razón, ya que el párrafo final del artículo 4º es una simple invitación a las provincias. Ocurre que dicha invitación está redactada en términos que parecerían imperativos. La parte final de ese artículo no es una condición ni está sujeta a plazos.

Si fuera una condición tendría que decir que el presente artículo tendrá como condición que las provincias dicten normas similares respecto de los municipios. O, si estuviera sujeto a plazo, se diría que, para ser aplicada esta norma, las provincias deberán dictar en tal caso normas similares respecto de los municipios.

Si no está sujeta a plazo ni a condición, debe entenderse que es una simple invitación. Ahora bien, como está redactada en términos aparentemente imperativos, corresponde la modificación propuesta por el señor senador Romero Feris, ya que se adecua a lo que el legislador, es decir nosotros, los autores del proyecto, quisimos poner y, también, a la Constitución Nacional.

Por lo tanto, me parece que esta discusión está de más, ya que esta parte final no constituye condición o plazo que se imponga a las provincias para que la iniciativa tenga plena vigencia.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 4º, con su redacción originaria.

—La votación resulta negativa.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura al texto final del artículo 4º, que recoge las rectificaciones solicitadas.

Sr. Secretario (Macris). — El último párrafo del artículo 4º quedaría redactado de la siguiente manera: "Recomiéndase a las provincias dictar normas similares para su relación con los municipios".

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 4º con la modificación propuesta.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el artículo 5º.

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: antes de pasar al artículo 5º quiero proponer la introducción de un nuevo artículo con la intención de completar lo manifestado por el señor senador por la Capital.

Si bien allí se indica de dónde van a provenir los recursos, sería mucho más lógico y correcto que en el texto del proyecto se incorporara una norma que estableciera, como se hace habitualmente, lo siguiente: "Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley se tomarán de 'Rentas generales'". De esta forma quedaría determinado el origen de los fondos con los que se atenderá el cumplimiento de la ley.

Este artículo quedaría incorporado como 5º, de manera que el que en la redacción originaria figura con ese número pasaría a ser el 6º.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Deseo apoyar las manifestaciones vertidas por el señor senador Menem, ya que su propuesta apunta al mayor ordenamiento y prolijidad necesarios para adoptar una disposición de esa naturaleza; asimismo queda justificada con mayor razón lo dicho anteriormente en el sentido de que conocemos fehacientemente que estas mayores erogaciones presupuestarias van a ser compensadas simétricamente por las iniciativas impositivas a consideración de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el nuevo artículo 5º propuesto por el señor senador por La Rioja.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 6º, ex 5º.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: creo necesario formular una precisión con respecto a este artículo que contiene la decisión, siempre penosa, de establecer el estado de sitio, frente a las manifestaciones vertidas por el señor senador por el Chubut y las que agregó luego la señora senadora por Santa Fe cuando solicitó la lectura del decreto 714 del Poder Ejecutivo que debemos ratificar.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto que consideramos, se ratifica dicho decreto en

su parte resolutive pero se amplían los motivos, el alcance, la razón o el origen de la decisión que se adopta al establecer el estado de sitio. La parte resolutive queda igual. Pero no se trata solamente de los hechos que vienen aconteciendo en la provincia de Santa Fe sino también, lamentablemente, de los que se han extendido a otras provincias y que arriesgan extenderse a otros lugares del país.

Además, como surge también de los fundamentos del proyecto, en las causas o motivos del estado de sitio se ha querido comprender no sólo esos hechos de conmoción, vías de hecho, incidentes ocurridos en las calles o mercados, sino también los que puedan tener su origen en el accionar de agentes económicos incompatibles con los deberes de la hora, a través de conductas como las del acaparamiento de bienes, elevación injustificada de precios y violación de normas sobre comercialización y exportación que redundan en detrimento de los intereses de la comunidad.

Es necesario formular esta aclaración porque de acuerdo con cierta jurisprudencia los motivos tenidos en cuenta por el legislador —sea el Poder Ejecutivo o el Congreso— al establecer el estado de sitio son apreciados para determinar el alcance de la medida.

Por lo expuesto quiero remarcar que de acuerdo con los fundamentos del proyecto éste es el sentido de la decisión que adoptará el Senado al sancionar este artículo 6º y el alcance que tiene la ratificación del citado decreto, que se extiende más allá de su contenido originario; es decir que es idéntico con respecto a la forma de declarar el estado de sitio en todo el territorio de la Nación pero más amplio en los motivos o causas que justifican esta grave decisión.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Sólo deseo hacer una aclaración con respecto a la redacción de este artículo.

Cuando dice: "Ratificase el decreto de necesidad de urgencia Nº 714...", debemos entender que el decreto en realidad no es de necesidad de urgencia sino de implantación del estado de sitio.

Lo que ocurre es que la implantación de dicho estado se funda en razones de necesidad y urgencia; constituye una doctrina invocada por el decreto del Poder Ejecutivo y que, por el otro lado, ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por eso considero que sería más racional que el artículo estableciese: "Ratificase el decreto 714 del Poder Ejecutivo nacional del día 29 de

mayo de 1989 fundado en razones de necesidad y urgencia, por el cual se implantó..." y sigue el texto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: con respecto a la extensión del estado de sitio a todo el país adhiero a las consideraciones expresadas por el señor senador por la Capital, porque cuando analizamos la redacción se tuvo en cuenta precisamente el tema económico. Porque indudablemente las razones que llevaron a declarar este estado de sitio derivan de una crisis económica que se ha visto agravada por el accionar inescrupuloso de ciertos operadores económicos que, aprovechándose de ella, proceden de forma tal que la hacen más grave, llevando a estados de miseria a grandes sectores de la población. Por eso es perfectamente justificada la extensión del estado de sitio a todo el país.

Por otra parte, después de haberse dictado el decreto del Poder Ejecutivo, se han producido nuevos hechos en otros lugares del país; por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, lo cual justifica el acierto de ese decreto al extender el estado de sitio a toda la República.

En cuanto a la observación formulada por el senador por el Chubut, entiendo que es correcta, aunque me parece que está de más el agregado que propone para determinar la naturaleza del decreto del Poder Ejecutivo. A mi juicio, basta con su individualización.

Entonces, propongo que se diga directamente: "Ratificase el decreto número 714 del Poder Ejecutivo nacional...", continuando con el texto tal como está redactado. Es decir, no haría falta invocar que esa norma fue dictada por razones de necesidad y urgencia dado que ello ya se indica tanto en sus fundamentos como en los del proyecto de ley que estamos considerando.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Señor presidente: indudablemente, una medida de esta naturaleza —suprimir las garantías constitucionales de los ciudadanos— conmueve y estremece el espíritu del hombre argentino. Dadas las circunstancias que al país le toca vivir, que no son otra cosa que el corolario de una larga cadena de desaciertos y de obnubilación frente a realidades que venimos soslayando, no cabe otra alternativa que suprimir las garantías constitucionales para poder manejar más adecuadamente la situación en todo el territorio del país.

Creo que es necesario apuntar las causas reales de esta situación. La sociedad no ha explo-

tado porque sí en Córdoba, en la ciudad de Rosario o en la provincia de Buenos Aires. Aquí hay un clima de irritación general en toda la Nación, producto de una situación económica que trae como consecuencia no poder solventar las mínimas necesidades de una familia. No se trata solamente de que no alcanza para la provisión de alimentos, sino que tampoco se pueden adquirir medicamentos ni educar bien al niño argentino. Es decir, aquí hay un problema de estructura económica que ha empujado al país al fondo del abismo. De allí tendremos que sacarlo con trabajo, son sacrificio y, fundamentalmente, con honestidad.

Por ello, creo que entrar ahora en discusiones acerca de interpretaciones dialécticas no hace otra cosa que demorar las soluciones reales que el país necesita en este momento. No quiero con esto negar —de ninguna manera podría hacerlo— la juridicidad de los actos que debemos realizar. Pero la sociedad ha producido un hecho que debe ser encarado porque representa la realidad que tenemos entre manos.

Obviamente, es una realidad cruel que ha llevado al espíritu argentino al estado de temor y a no saber qué va a ocurrir mañana. Ante esta situación, nosotros necesitamos forzosamente —aunque suene demasiado duro, aunque parezca que se violenta alguna norma jurídica— preservar el orden y la disciplina. Es necesario restaurar la autoridad que se está diluyendo y, reitero, ordenar la situación a través de las medidas que debemos adoptar en este Parlamento, en concordancia con el Poder Ejecutivo nacional.

Señor presidente: por estas razones es imprescindible que procedamos con decisión. Si bien es cierto que debemos preservar la autonomía provincial, frente al peligro que significan estos brotes que ya están siendo incontrolables por parte de las fuerzas policiales —ya se le ha dado intervención a otras fuerzas de seguridad, como la Gendarmería Nacional—, y que de continuar harían necesario apelar a las fuerzas armadas para restablecer el orden y evitar la disolución del país, no podemos seguir con todas estas consideraciones que, más allá del valor que puedan tener, no hacen sino demorar la solución.

Es necesario asistir a la población con los mínimos elementos para su subsistencia, porque ya hay desabastecimiento; no lo podemos negar. Tenemos que poner en marcha el aparato productivo, porque sabemos que todas las fábricas están paradas. Tenemos que terminar con la especulación criminal, que continúa realizándose en esta suerte de diabólico malabarismo en el manejo de las divisas, en virtud del cual —debemos confesarlo los argentinos con dolor— ya no vale nada

nuestra moneda. Un país que no tiene signo monetario carece de soberanía, un país sin soberanía es un país sin dignidad. Estamos manejando todo con el dólar, con la moneda verde, con las divisas.

Si tenemos que asumir esta responsabilidad, hagámoslo con la hidalguía y el estoicismo que siempre demostró el hombre argentino en las situaciones difíciles. De lo contrario, avengámonos a agachar la cabeza, a caminar de rodillas y a seguir sancionando leyes totalmente inconducentes frente a una realidad que todos los días está sacudiendo la estructura del país y poniendo en peligro la unidad de la Nación.

No se trata de si una provincia o una región tienen un problema en este momento. El problema es del país, es global. Este es el problema que tenemos que encarar, señor presidente, razón por la cual voy a aceptar la modificación propuesta por el señor senador por Corrientes porque creo que debemos seguir preservando el respeto que debe existir hacia las provincias.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 6º, ex 5º, con la modificación propuesta por el señor senador por La Rioja.

—La votación resulta afirmativa.

—El artículo 7º, ex 6º, es de forma.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley¹. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

La Presidencia se permite recordarles a los señores senadores que hay una citación para sesión preparatoria hoy a las 17.

Sr. Nápoli. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Señor presidente: solicito seguir en cuarto intermedio, a la espera de recibir las sanciones de los proyectos tributarios que se están tratando en Diputados.

Sr. Presidente. — La Presidencia entiende que no es necesario el cuarto intermedio ya que en virtud de la sesión preparatoria citada para esta tarde, en que presumiblemente se fijarán los miércoles y jueves como días de sesiones ordinarias, automáticamente se pasaría de inmediato a la sesión ordinaria del día miércoles.

* Queda levantada la sesión.

—Son las 3 y 14.

MARIO A. BALLESTER,
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

¹ Ver el Apéndice.

5

APENDICE

SANCION DEL HONORABLE SENADO

Estado de emergencia social, sanitaria y alimentaria,
y estado de sitio

Artículo 1º — Declárase el estado de emergencia social, sanitaria y alimentaria en todo el territorio de la República, a partir de la promulgación de la presente por el término de sesenta días.

Art. 2º — Sin perjuicio de otras medidas a disponer por el Poder Ejecutivo y leyes complementarias, se establece:

- a) Elevar las jubilaciones mínimas del Sistema Nacional de Previsión a la suma de \$ 7.200 a partir del 1º de junio de 1989. Desde la misma fecha se establecerá una pensión mínima dentro del Sistema Nacional de \$ 6.500.
- b) El 50 % del sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre se pagará íntegramente el día 14 de junio de 1989, tanto para los salarios cuanto para las jubilaciones y pensiones.
- c) Se invita a los gobiernos provinciales, territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a dictar normas similares en sus respectivas jurisdicciones.

Art. 3º — Sustitúyense los textos de los artículos 10 y 14 de la ley 16.459 por los siguientes:

Artículo 10: A petición de cualquiera de los sectores representados en el Consejo, se podrá modificar el monto del salario vital mínimo antes de su vencimiento, pero la resolución modificatoria sólo entrará en vigencia en la forma y condiciones establecidas en el artículo 14 de esta ley.

Excepcionalmente, y con el acuerdo de los tres sectores representados, el Consejo podrá disponer

que la modificación entre en vigencia y surta efectos a partir del día siguiente al de su publicación.

Artículo 14: El salario vital mínimo tendrá vigencia y será de aplicación obligatoria al mes siguiente de la publicación, salvo el caso del segundo párrafo del artículo 10. En todos los casos, dentro de los tres días de haberse tomado la decisión deberá publicarse por un día en el Boletín Oficial o en otros órganos periodísticos que garanticen una satisfactoria divulgación y certeza sobre la autenticidad de su texto.

Art. 4º — Cuando el porcentaje del incremento salarial dispuesto por el gobierno nacional supere el porcentaje de aumento de los recursos de coparticipación de la ley 23.548 en igual período de tiempo, el Tesoro nacional transferirá a las provincias las sumas que resulten de aplicar esa diferencia porcentual sobre el costo salarial de cada provincia. A los fines de la determinación del costo salarial se computará la planta personal ocupada al 31 de diciembre de 1988 si hubiere registro fehaciente.

Esta regla de transferencia excepcional de recursos operará sólo en el caso en el cual la remuneración de los agentes provinciales no supere a la de los servidores públicos nacionales.

Recomiéndase a las provincias dictar normas similares para su relación con los municipios.

Art. 5º — Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley se tomarán de "Rentas generales".

Art. 6º — Ratifícase el decreto 714 del Poder Ejecutivo nacional del día 29 de mayo de 1989 por el cual se implantó la vigencia del estado de sitio en todo el territorio de la República por el término de 30 días a fin de hacer cesar la perturbación interior imperante.

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.